



Los mensajes sobre Cienfuegos, gobernadores del PRI... y el "amigo Osorio"

(Mathieu Tourliere, pág. 6-9)

El 24 de octubre de 2016 una duda penetró la mente del capo Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como H2. El delincuente le dio vueltas hasta tener dolores de cabeza; y de la incertidumbre le nacieron las ganas de venir “matando gente”.

El hombre estaba convencido que, desde finales del año anterior, pagaba regularmente sobornos millonarios al general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A cambio, recibía protección de quien identificaba como el Padrino de su grupo criminal, organización que nació de la escisión del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que en aquel entonces operaba con impunidad en Nayarit.

Sin embargo, durante una plática sostenida momentos antes, otro mafioso le dijo que su Padrino era, en realidad, un militar “retirado” y solamente un “amigo del secretario de la Defensa”, pero no el propio Cienfuegos.

El hombre agarró su celular y escribió a su sobrino Daniel Silva Gárate.

“Oiga, las veces que ha ido a México, ¿Ha visto al padrino que sale en la TV u otro señor?”, le preguntó.

En diciembre de 2015 Silva Gárate había viajado a la Ciudad de México para pactar acuerdos de protección con el Padrino, al que no identificó por su nombre. En una casa de las Lomas de Chapultepec tuvo una plática con el general yucateco Virgilio Daniel Méndez Bazán, a quien señaló como “el segundo del Padrino”. Méndez fue diputado del PRI y subsecretario de la Defensa de Cienfuegos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No a ese señor, ¿Por qué? Al mismo señor. No el otro. ¿Por qué?”, preguntó el sobrino a su tío...

En el largo intercambio de mensajes que continuó, el enojo en el H2 creció ante la incapacidad de Silva Gárate de decir si Cienfuegos era, o no, el Padrino, pues se refería a él sólo como “el hombre”, “el amigo”, o “ese señor que se pone como tomate colorado cuando se enoja”.



“Pues Cienfuegos, ¿No? ¿Cómo va a estar retirado? Si es el secretario de la Defensa”, explotó el H2, y abundó: “Pues usted es el único que me puede decir si vio a Cienfuegos y al tío (...) Voy a investigar, tengo una persona que me ayudará; siendo el Padrino el que pensamos que vio usted, la cosa está bien. Pero si no, está mal la cosa”.

La plática se alargó sin determinar quién era el Padrino, hasta que el patrón se relajó y soltó: “Lo que si veo es que estamos protegidos, mas no sé si por Cienfuegos. Y me metieron esta duda estas personas (...) esta vez me dieron muchos detalles, de un general retirado o algo así, que es nuestro Padrino, y él tiene línea con Cienfuegos. Espero que todo nos salga bien”.

Agregó que, de todas maneras en Nayarit “tenemos asegurado al gobierno que viene en camino, sean quien sea que gane”; ello en pleno gobierno del priista Roberto Sandoval Castañeda.

Esta plática se encuentra en las 751 cuartillas del expediente que el gobierno de Estados Unidos envió el 29 de octubre último a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que, a su vez, remitió el 2 de noviembre pasado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que el gobierno mexicano investigue al general en retiro.

El nombre del polémico militar aparece varias veces en el expediente estadounidense –con faltas de ortografía, en algunas ocasiones–, y hace referencia de otros altos funcionarios del gabinete de Peña Nieto, así como de los entonces gobernadores priistas Eruviel Ávila Villegas (Estado de México) y Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa).

Los documentos exhiben, desde sus entrañas, la operación y la expansión de un grupo criminal, así como sus vínculos con la política y la cúpula militar.

Va por México o la lucha por las candidaturas opositoras

(Álvaro Delgado, pág. 14-17)

Con Ricardo Anaya como su principal estandarte y Margarita Zavala como símbolo de reconciliación tras la estruendosa ruptura de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) examina un elenco de aspirantes a diputados federales que involucra hasta al expresidente Vicente Fox, al litigante Diego Fernández de Cevallos y a incondicionales de Felipe Calderón que, además de su esposa, incluye a su hermana Luisa María, a su amigo Ernesto Cordero y a su exsecretario Jordy Herrera.



A dos semanas de que venza el plazo para definir a sus candidatos a diputados federales, todos por el método de designación, el PAN valora las candidaturas de exgobernadores como Miguel Ángel Yunes y Antonio Gali, así como del secretario general, Héctor Larios, y el presidente de la Comisión Política Nacional, Santiago Creel, mentor político de Marko Cortés, dirigente de ese partido.

Los cabildeos y negociaciones entre las facciones internas del PAN se han intensificado para definir las listas de diputados plurinominales –las posiciones más codiciadas– y las de mayoría, tanto en los 123 distritos en los que postulará a sus propios candidatos como en los 60 que le corresponde proponer como parte de los 177 pactados en la coalición Va por México.

Pese a que públicamente se dice comprometido con la sociedad civil, cuyas más de 500 organizaciones dieron lugar a la alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) –articuladas por el magnate Claudio X. González y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, el PAN prevé una marginal inclusión de no militantes, lo que ha dado lugar a protestas.

De hecho, la posibilidad de que sea mayor de 177 el número de candidaturas de la coalición, cuyos negociadores son Rubén Moreira (PRI), Armando Tejeda Cid (PAN) y Jesús Ortega (PRD), implicará menos candidaturas “ciudadanas”, como exigen a esos partidos organizaciones como Futuro 21, que encabeza el expriista, experrredista y expanista Demetrio Sodi.

“Proponemos a Va por México que en cada entidad federativa, municipio, alcaldía o distrito promueva la combinación de un candidato de cada partido (PAN, PRI o PRD) y uno proveniente de la sociedad civil con ascendiente en sus comunidades”, planteó Futuro 21 en un desplegado publicado el martes 12 y firmado entre otros por Beatriz Pagés, Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano, Carlos Alazraki, Benito Nacif, María Elena Pérez Jaén, Carlos Elizondo, Rubén Aguilar y Jesús Reyes-Heroles.

Y es que en la definición de las candidaturas del PAN, incluyendo las que forman parte de la alianza formal con PRI y PRD, gravita el retorno o no del grupo de Calderón, quien paralelamente negocia posiciones con el partido Movimiento Ciudadano (MC) que, por su parte, desdeñó integrarse a Va por México.

Calderón negocia con Clemente Castañeda, dirigente nacional de MC, y Salomón Chertorivski, quien fue secretario de Salud de su gobierno y quien aspira a ser diputado federal de ese partido por la Ciudad de México, donde fue secretario de Desarrollo Económico del entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, hoy senador.



Transitando al autoritarismo

(Tonatiuh Guillén, pág. 49-50)

“El gobierno no es la solución a nuestro problema, el problema es el gobier-no”: Ronald Reagan.

“Todavía hay en mi partido quienes creen en la política del consenso. Los considero colaboracionistas, traidores... Lo digo en serio”: Margaret Thatcher. El gobierno del presidente López Obrador pareciera fundarse en ambos principios políticos, propios de todo modelo autoritario. Basado en una concepción que califica de manera generalizada a la administración pública de corrupta e inútil – incluyendo a toda la burocracia y personal en el mismo costal –, su objetivo ha sido restringir las capacidades operativas del gobierno federal en prácticamente todas las áreas mediante el argumento de la austeridad. La excepción son las Fuerzas Armadas y los proyectos favoritos del presidente.

No hay duda de que la administración federal había acumulado grandes distorsiones y rezagos por muchos años; también es cierto que estaba sometida a horrendas prácticas corruptas (y todo indica que persisten). Pero la tarea era transformarla, modernizarla, crear mejores instituciones para servir a la sociedad y al país. La tarea no consistía en anular las capacidades del Estado, como sucede hoy incluso en áreas urgentes y prioritarias, como la salud pública.

Lo grave del escenario es que no existe un mapa de arribo, un proyecto institucional de reformas que permita justificar el brusco giro. El argumento es simplemente que el gobierno y la administración pública son aparatos de corrupción e inútiles. Son el problema, como diría Reagan, por lo cual se ha decidido reducirlos drásticamente. Si en el camino se pierden valiosas capacidades y funciones públicas, en educación, salud, desarrollo económico, competitividad, ciencia, cultura, pueblos indígenas, atención a la niñez, protección a víctimas y mujeres... ni modo. En el imaginario presidencial se asume que las becas sociales –que siguen siendo un deliberado hoyo oscuro y con dinero en efectivo– son la compensación del ajuste.

No es difícil prever que este modelo sea materialmente insostenible. Se empequeñece no solamente al aparato estatal, sino además las capacidades de éste para promover el desarrollo económico. Es decir, sin una economía que genere riqueza no habrá manera de repartir dinero a las personas. Esto lo saben claramente en muchas áreas del propio gabinete de AMLO, pero callan; sólo esperan que les alcance la liga para las elecciones de junio próximo. No hay razones de Estado en este horizonte de altísimo costo para el desarrollo nacional.



Por otro lado, la inspiradora cita de Thatcher también parece rondar al modelo de gobierno de AMLO. De manera interna al gobierno implica que los funcionarios públicos tengan obediencia ciega, fidelidad total, disciplina sin pestañear, sea cual sea la decisión del presidente. Hacia afuera sucede exactamente lo mismo. Se está con el presidente o se está en contra. Sin argumentos, toda diferencia de opinión se clasifica en automático como un ataque o traición. Esta artificial ruta de polarización, impulsada desde la Presidencia, no conduce a gobernar mejor un país extraordinariamente diverso como es México.

Debemos vernos en el espejo del gobierno de Trump y su abrupto final. Si en las elecciones de junio de este año ocurre un descalabro electoral para Morena – como parece que el gobierno está previendo–, desde la Presidencia puede abrirse una grave ruta que cuestione la legitimidad del resultado y además del sistema electo que sería más crítico. Durante las próximas semanas es previsible que desde las “mañaneras” suban de nivel los ataques contra partidos políticos rivales y contra las funciones del INE. En caso de un mal resultado para Morena, no es improbable que regrese la conocida protesta por el “robo” electoral... ahora a la Trump, dirigida desde Palacio Nacional.

Visto de conjunto, el modelo de gobierno que se está construyendo en México se parece más al presidencialismo personalista de hace 60 años que al futuro imaginado en 2018, de modernización política y de las instituciones del Estado. Se dirige a centralizar y personalizar las capacidades gubernamentales en el presidente, en un formato incluso aún más vertical que en el pasado. Implica desaparecer contrapesos –que costó años y años de lucha arrancar al Estado autoritario–, como el INE, el INAI, la CNDH y otros organismos autónomos. Implica dar discrecionalidad presupuestal al presidente para decidir directamente el gasto público. Implica limitar a los otros poderes federales, el Congreso y la Suprema Corte, y en lo posible anularlos. Implica subordinar nuevamente a los gobiernos estatales y municipales.

Además la ruta actual se apura en edificar una administración pública acotada, obediente, disciplinada, entrenada para cumplir órdenes puntualmente: por eso la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. A diferencia clara del viejo presidencialismo, para los tiempos de AMLO la inclusión progresiva de las Fuerzas Armadas en funciones y servicios públicos es una cuestión esencial, operativa, cada vez menos renunciable. Ahora en fase uno, pero ya desbordada en comparación con el rol institucional que habían cumplido por décadas.



Todo indica que el presidente va por más, lo cual incrementará la presencia y sobre todo los intereses materiales de las respetadas Fuerzas Armadas en tareas que esencialmente no les corresponden. La pregunta de fondo es si se trata de una circunstancia provisional o de una modificación de alcance estructural sobre el Estado. Por lo pronto, los movimientos se dirigen a lo se-gundo por decisión presidencial.